

# LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN APOYO DE LA DEMOCRACIA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA: EL CASO DE CHILE

ALAN ANGELL

MI HIPÓTESIS GENERAL ES QUE desde el golpe de estado en Chile en septiembre de 1973 hasta que se iniciaron los movimientos de protesta en mayo de 1983, la política en Chile se limitó esencialmente a la política gubernamental y a las restringidas actividades de los abogados del régimen que deseaban modificar las líneas políticas provenientes de una administración altamente centralizada. El juego político de la oposición no se llevó a cabo en Chile sino en el extranjero. Los partidos de centro y de izquierda moderada concentraron sus actividades en diversos países latinoamericanos, así como en Estados Unidos y en Europa. Los partidos de izquierda marxistas, en los países del bloque comunista.

En consecuencia, es razonable argumentar que la dimensión internacional de la política chilena es de gran importancia y que la influencia del exilio es mucho mayor que en el caso de otras dictaduras militares en América Latina. Después de 1983 regresaron muchos exiliados, pero las ligas que habían forjado con una gran variedad de gobiernos, partidos y organizaciones privadas jugaron un papel fundamental en la lucha de la oposición para derrocar a Pinochet o para derrotar al régimen militar. Además, sus ideas fueron profundamente modificadas por el contacto prolongado con las políticas y los partidos de los países que los recibieron. La ayuda financiera a la oposición, proveniente de distintas fuentes y canalizada a través de diversos medios, fue absolutamente esencial para mantenerla viva y organizada, sobre todo durante el enorme esfuerzo que implicó derrotar a Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de 1988.

Sin embargo, antes de discutir estos puntos con detalle, es necesario empezar examinando qué tan democrático ha sido Chile después del plebiscito.

## ¿FIN DE LA DICTADURA, RENACIMIENTO DE LA DEMOCRACIA?

Laurence Whitehead ha decidido no calificar a la democracia chilena como una democracia frágil, sino colocarla en la categoría de “incipiente o con tendencia a la crisis”, junto con las de Guatemala y Perú: Chile a principios de 1989 es una rara entidad política: mantiene muchas características de la dictadura (un poder ejecutivo altamente centralizado, un aparato de seguridad represivo, control sobre los medios de comunicación, un proceso de toma de decisiones envuelto en el secreto); pero posee también características de un sistema político competitivo (una actividad partidista relativamente abierta, regateos partidistas sobre la elección de candidatos para las próximas elecciones, presentación de demandas de diversos grupos sociales y —de gran importancia— un calendario de elecciones para la presidencia y para el congreso).

Sería notable que, como parece posible, un dictador que ha detentado un enorme poder por 15 años, que cuenta aún con la confianza del ejército y que no ha perdido el apoyo de los sectores empresariales, delegara el poder en marzo de 1990 a un sucesor civil después de las elecciones de diciembre de 1989. Es probable que suceda, porque Pinochet, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y senador vitalicio, y las fuerzas armadas como institución, esperan ser capaces —a través de su dominio del Consejo Nacional de Seguridad— de asegurar la continuidad de una economía de mercado libre (lo cual es probable) y del sistema político autoritario incorporado en la constitución de 1980 (lo cual es menos probable).

De cualquier forma, Pinochet y sus asesores más cercanos no esperaban, y ciertamente no querían, perder el plebiscito. Por qué perdieron, sería objeto de otra discusión. Habiendo perdido ¿en qué puede fundamentarse un optimismo cauteloso acerca del futuro de la democracia en Chile?

En primer término debe considerarse simplemente el grado de participación y la magnitud del voto a favor del no. Cerca de 93% del electorado potencial se registró para votar y el proceso no era de ninguna manera fácil ni poco costoso. De los 7.4 millones de votantes, votaron cerca de 97%. El no recibió 55% de los votos depositados y el sí, 43%. Las mujeres votaron más por el no que por el sí; las áreas favorecidas por la reciente prosperidad económica proveniente del *boom* de las exportaciones agrícolas, votaron también por el no. El sí ganó solamente en dos regiones: en las zonas rurales y en los pueblos pequeños, pero sólo por un pequeño margen. Los suburbios ricos de Santiago votaron

56% por el sí y 42% a favor del no, mientras que las áreas pobres votaron 63% por el no y 34% por el sí.

Esencialmente, el plebiscito fue sobre democracia política más que sobre asuntos económicos. El registro y el voto, ambos masivos, muestran un enorme deseo de regresar a la democracia política del pasado. Esto es sin duda de gran importancia, y distingue a Chile de Perú o Guatemala por ejemplo. La cultura política de la gran mayoría de los chilenos, sus preferencias políticas y su compromiso cívico se inclinan fuertemente a favor de la democracia política.

No obstante, ¿qué puede decirse de los diversos grupos que pueden mantener frágil una democracia? La derecha empezó a distanciarse de Pinochet conforme avanzó la campaña, en parte como respuesta ante el fracaso del gobierno para involucrarla en la misma. El partido más poderoso de derecha, *Renovación Nacional*, es el menos identificado con el régimen, el más abierto a dialogar con la oposición —aún con relación al asunto crucial de la reforma constitucional— y también el más capaz de ofrecer candidatos que puedan triunfar en las próximas elecciones. Su posición básica es que el golpe de 1973 fue necesario y que por lo tanto, no hay nada de qué avergonzarse (aunque algunos de sus miembros han mostrado su preocupación por las violaciones de los derechos humanos) y sí mucho de qué enorgullecerse, especialmente en el ámbito de la economía, que de acuerdo con la mayoría de los indicadores macroeconómicos parece mucho más sana que la de los países vecinos.

Sin embargo, también argumentan que el proceso de “institucionalización” ha terminado y que es el momento para consolidarlo y abrir el sistema político (pero no para los partidos “no democráticos”). Estos argumentos han encontrado eco en la comunidad empresarial. Los empresarios sienten igualmente que la economía de libre mercado se fortalecería si dejara de estar identificada con el gobierno de Pinochet. Se han preparado y se han iniciado, de hecho, pláticas con los sindicatos para reformar las leyes laborales; asimismo, se ha considerado otorgar aumentos salariales modestos. Los empresarios abrieron también el diálogo con los portavoces de la posición económica de la oposición y han encontrado que tienen mucho en común con ellos.

El ejército en Chile ha sido siempre, como lo es hoy, una institución inescrutable. Pero no puede afirmarse que el ejército, ni tampoco la fuerza aérea, la policía o la marina, estén preocupados por los sucesos recientes. Están orgullosos de su constitución, que contempla la posibilidad de la derrota en un plebiscito. Las fuerzas armadas no sienten que han sido rechazadas como institución, ni que la constitución será alterada drásticamente. Tampoco creen que se escenificarán juicios so-

bre los abusos de los derechos humanos según el modelo argentino, ni que el sistema económico esté en peligro. Conservan un enorme poder a través del Consejo de Seguridad Nacional y de varios apartados constitucionales que hacen, por ejemplo, imposible que un presidente mande a retiro simultáneamente a los comandantes en jefe de las cuatro ramas de las fuerzas armadas.

¿Cuál es la actitud de la oposición? ¿Amenaza la izquierda radical en alguna forma el proceso de transición? Los principales partidos políticos de oposición —el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido Radical (PR), los socialistas moderados y los partidos social-demócratas— tienen un compromiso fuerte y real con la democracia. Todos apoyan la puesta en marcha de políticas moderadas y responsables, que consideran indispensables para el restablecimiento de la democracia. El partido que más probabilidades tiene de llegar a la presidencia y dominar el gobierno cuando Pinochet deje el poder, es el Partido Demócrata Cristiano. Es un partido menos sectario, errático o incoherente que, por ejemplo, el APRA de Alan García, y sus políticas son más congruentes con los intereses de los grupos empresariales. Si se extiende la analogía a Brasil, el PDC chileno tiene una base mucho más sólida que la de la alianza entre Sarney y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Es menos probable que se le identifique plenamente con una figura política dominante, como es el caso de Alfonsín en Argentina, y a diferencia de lo que ha sucedido en este país, no hay en Chile un partido que pueda oponerse al PDC con una base obrera tan poderosa como la del peronismo en Argentina.

El hecho de que las dos facciones principales del Partido Socialista acepten el programa inicial de la alianza amplia de la oposición, deja al Partido Comunista Chileno (PCCH) como la única fuerza política que puede llevar a la desestabilización. El PC enfrenta una serie de dilemas. Si acepta silenciosa y rápidamente todas las tácticas de la oposición, corre el riesgo de perder su identidad política. Si apoya vigorosamente la resistencia armada contra el gobierno de Pinochet, como sucedió cuando creó el *Frente Patriótico Manuel Rodríguez* (FPMR), enfrenta el peligro de caer en una espiral de violencia política, de la cual los más probables beneficiarios serían los grupos de extrema derecha, incluyendo al general Pinochet. La capacidad de control del PCCH sobre sus militantes es menor ahora: la base del partido no la conforman ya los debilitados sindicatos, sino los jóvenes desempleados de las barriadas, quienes se unieron al PCCH y al FPMR precisamente porque era el único partido importante que estaba preparado para tomar las armas en contra de la dictadura. Pero es tradición del Partido Comunista Chileno actuar dentro del sistema político y parlamentario. Mu-

chos de los líderes que han regresado del exilio han establecido claramente que desean volver a asumir esta tradición. Puede predecirse que el PCCH hará un llamado para movilizar pacíficamente contra el régimen a estudiantes, miembros de los sindicatos, grupos profesionales, habitantes de los barrios pobres y activistas pro derechos humanos; pero los comunistas no sabotearán voluntariamente la alianza amplia de la oposición. Puede también anticiparse que una de las tácticas del gobierno será precisamente la de provocar al Partido Comunista para que sabotee esa alianza, ya sea a través de la represión, de la infiltración en las filas del partido o por otros medios que no excluyen el asesinato.

La Iglesia católica en Chile ha desempeñado el papel que Laurence Whitehead ha denominado de "enlace", aun cuando, durante la mayor parte del gobierno de Pinochet, pocos políticos de la oposición hayan estado dispuestos a aprovechar la mediación que se ofrecía: la razón innegable fue que el gobierno no estaba dispuesto a negociar. Las protestas de mayo de 1983 modificaron las prioridades de la Iglesia católica: pasó de la defensa de las víctimas del régimen y de tratar de mantener vivas las instituciones representativas del país, a una participación más activa al intentar ser mediadora entre el gobierno y la oposición. Un papel que, por lo demás, iba mejor con la personalidad de Juan Francisco Fresno, el nuevo cardenal y arzobispo de Santiago. Sin embargo, mientras enfatizaba su papel de mediadora, la Iglesia vio con claridad que esa mediación era imposible si la oposición no se organizaba bajo una fachada de unidad; por esto, inspiró el *Acuerdo Nacional* de 1985, que unió por primera vez a una amplia gama de políticos para planear conjuntamente las actividades de la oposición. El *Acuerdo* trastabilló con el intento de asesinar a Pinochet en 1986. La violencia que se desató después del atentado resultó en el regreso a la política de confrontación y represión. Sin embargo, el *Acuerdo* había sembrado la semilla de la que saldría la oposición unida en febrero de 1988: el *Comando por el NO*. En suma, la contribución de la Iglesia al proceso de democratización ha sido inmensa, aunque ahora que los partidos políticos han recuperado sus funciones tradicionales sea menos visible.

El movimiento obrero en Chile había sido tradicionalmente un actor político muy importante, capaz de ejercer una gran presión en momentos de crisis o de intensa movilización política. Todo esto ha cambiado. Seguramente habrá presión para reformar las leyes del trabajo y para elevar no sólo el salario mínimo, sino los salarios reales. Sin embargo, el sindicalismo organizado es mucho más débil que antes: no más de 10% de la fuerza de trabajo está sindicalizada, cantidad que fue tres veces mayor durante gobiernos anteriores. La mayoría de los líderes obreros están desempleados; debido a la reducción de la indus-

tria, los sindicatos industriales son más pequeños; las tasas de desempleo son más altas que el promedio histórico; los sindicatos tienen pocos recursos. La situación sindical chilena contrasta con el gran poder que conservan los sindicatos peronistas en Argentina, o incluso los de Brasil, donde el acelerado ritmo de crecimiento industrial permitió una notable expansión del sindicalismo y una ola de huelgas a fines de los setenta que acabó de convencer a los militares de que dejaran el poder.

Existen otras organizaciones populares en Chile relacionadas con los barrios pobres o con grupos que se organizan alrededor de la defensa de asuntos específicos, como los derechos humanos. Estas organizaciones han mostrado gran capacidad para actuar ocasionalmente en defensa de sus intereses, pero no poseen un peso político permanente como para reemplazar a los partidos políticos o ponerles condiciones. Todo esto podría cambiar, por supuesto, con el restablecimiento pleno de la democracia; pero, al menos a corto plazo, no hay evidencia suficiente para pensar que una ola de demandas y protestas sociales pudiera erosionar la política económica de un gobierno democrático en el futuro.

Pasemos ahora a considerar, junto con los otros actores políticos importantes, el tema central de este artículo: las influencias externas.

## EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Durante el gobierno de la Unidad Popular, Chile fue centro de la atención mundial. Después de 1973 el interés por Chile siguió siendo notable. Este grado de atención parece desproporcionado frente a la importancia real de Chile: un pequeño país sudamericano sin influencia. Sin embargo, la similitud de la política chilena con la de algunos países europeos proporcionó a Chile una simpatía y una comprensión que no tienen punto de comparación con las que recibió Argentina, marcada por el excepcional movimiento peronista. Las similitudes provenían en parte de que la estructura partidista chilena estaba basada en modelos europeos: tanto los demócrata-cristianos como los socialistas, los comunistas y los radicales tenían ligas con partidos extranjeros, seguían de cerca su desarrollo ideológico y frecuentemente se beneficiaron de su apoyo financiero.

Las dos superpotencias siguieron con atención los eventos chilenos, especialmente cuando el crecimiento de los partidos marxistas casi los llevó al poder en 1958. Estados Unidos, en particular, empleó una gran variedad de medios, directos e indirectos, para obstaculizar el progreso de la izquierda. La historia de la intervención norteamericana-

na en Chile después de la elección de Allende en 1970 es bien conocida. A fin de cuentas, lo importante es que el juego político en Chile se llevó a cabo bajo la mirada vigilante de la comunidad internacional en los años sesenta, y que siguió estando bajo su escrutinio en los años setenta y ochenta.

La diferencia fundamental después del golpe de 1973 es que, en muchos casos, los partidos de oposición siguieron a sus líderes al exilio. El exilio fue fundamental para el sistema de control político y de represión del gobierno de Pinochet, y fue impuesto en una escala sin precedentes en la historia chilena. En palabras de Jorge Arrate, un socialista que pasó muchos años de exilio en Holanda:

La expulsión de Chile, por razones políticas y/o económicas, de un considerable número de ciudadanos, constituyó en ciertos casos de manera explícita, un requisito de funcionamiento del nuevo régimen. En el terreno político este hecho fue clara y abiertamente expresado por las nuevas autoridades. Se trataba de extirpar del país a aquellos que sostenían doctrinas o filosofías consideradas subversivas y atentatorias del orden social capitalista y de los valores de estirpe "occidental" como la "doctrina de la seguridad nacional" [. . .] El orden y prosperidad del país no podían, en consecuencia, restablecerse sobre las bases deseadas sin la marginación de aquellos que más consistentemente se opondrían.<sup>1</sup>

No se sabe a ciencia cierta cuántos chilenos fueron exiliados desde 1973, ni cuántos están aún en el exilio. A mediados de 1986, las autoridades admitieron que 3 717 exiliados podían regresar. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hablaba de 30 000 y el Comité Pro Retorno en Chile estimaba que estaban en el exilio entre 100 000 y 200 000. El gobierno negó que éstos estuvieran ejerciendo presión para regresar.<sup>2</sup>

### ¿QUIÉNES ERAN Y DÓNDE ESTABAN LOS EXILIADOS?

El golpe del 11 de septiembre de 1973 fue mucho más violento de lo que se esperaba. Conforme empezaron a extenderse las noticias de las

<sup>1</sup> *Exilio. Textos de Denuncia y Esperanza*, Santiago, 1987, pp. 88-89.

<sup>2</sup> Todas las cifras citadas en este párrafo fueron tomadas de *El Mercurio*, Santiago, 12 de junio de 1986, p. 6 y de *Hoy*, Santiago, núm. 467, 30 de junio de 1986, p. 25. El número de *Hoy* contiene una entrevista con el sacerdote que estaba a cargo de *Pastoral del Exilio*. La Iglesia ha desempeñado el papel principal en la defensa de los derechos humanos de los chilenos, incluyendo el derecho a vivir en Chile. Esta sección dedicada al exilio está basada en un trabajo publicado por el autor y Susan Carstairs.

detenciones y de la brutalidad, la gente empezó a buscar ayuda en las embajadas extranjeras y en las iglesias. La primera reacción organizada fue el establecimiento de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONAR) pocos meses después del golpe; fue fundada por un grupo que incluía al obispo Helmut Frenz, representante de las iglesias luteranas en Chile. Este pequeño grupo —que fue en realidad el precursor del Comité para la Paz en Chile— actuó como vínculo entre los refugiados potenciales y las embajadas, y sus miembros condujeron muchas veces a refugiados hasta las embajadas, bajo un grave riesgo personal. En los primeros meses después del golpe, los esfuerzos organizados se dirigieron a ayudar a los extranjeros que estaban en Chile: había muchos exiliados brasileños que habían huído de la dictadura militar y también había simpatizantes de la UP provenientes de otros países latinoamericanos. De acuerdo con el mandato del ACNUR, se abrieron canales para ayudar a este grupo y, para marzo de 1974, 3 400 personas habían abandonado Chile.

Pronto se estableció un programa especial de asistencia a cargo del Comité Intergubernamental para la Migración Europea (CIME) con el fin de acabar con las dificultades burocráticas que plagaban las actividades del ACNUR en relación con los que intentaban ocultarse en el mismo país. Para finales de 1974, 6 700 personas habían sido reubicadas. La asistencia se dirigió en un principio a aquellos que temían ser detenidos o nuevamente arrestados; sin embargo, el número de personas en prisión o en campos de concentración chilenos creció continuamente. En diciembre de 1974 se firmó un acuerdo entre CIME, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CONAR y el gobierno chileno, para lograr que los detenidos sin juicio, por las disposiciones del estado de sitio, fueran trasladados al extranjero. En abril de 1975 se firmó un acuerdo similar que permitió a quienes habían sido juzgados y sentenciados pedir, en virtud del decreto 504, que se conmutara su sentencia por el exilio. Una vez obtenidas las visas para los prisioneros, CIME hacía los arreglos para el viaje; ayudó así a cerca de 3 000 prisioneros a abandonar Chile bajo este programa.

En marzo de 1978 el gobierno decretó una amnistía que cubría todos los delitos cometidos después del golpe. Esta medida recibió muchas críticas en el interior de Chile porque fue vista como una solución para librar a los oficiales del ejército de responsabilidad en el asunto de los prisioneros desaparecidos. Inicialmente el Ministerio del Interior dijo que 2 071 personas se beneficiarían de la amnistía; de éstas, 1 021 estaban ya en el exilio. De hecho, a los exiliados se les exigía un permiso si querían regresar, y el permiso de ninguna manera estaba garantizado.

En abril de 1978 se le negó la entrada a un viejo miembro del PCCH, y muchos prefirieron quedarse en el exilio. Para mayo de 1978 habían salido de Chile, al abrigo de la amnistía y a través del CIME, 153 prisioneros; el total fue tal vez de 300.

Al igual que los que buscaban refugio dentro de Chile, muchos miles huyeron a los países vecinos. Ya en 1974 se calculaba que había 15 000 chilenos en Argentina y 1 500 en Perú. El número de refugiados en Argentina es especialmente difícil de calcular, pues hay un continuo flujo migratorio entre Argentina y Chile. Sin duda, mucha gente, proveniente en particular de zonas rurales donde la represión está mal documentada, huyó cruzando la frontera, y no se ha registrado nunca en una institución oficial. La situación política argentina siguió deteriorándose durante 1975 y, con el golpe militar de 1976, los refugiados chilenos se encontraron en grave peligro; ACNUR ofreció ayuda, pero como sus oficinas de recepción de solicitudes se convirtieron en blanco de ataques por parte de grupos de ultraderecha, muchos exiliados se resistieron a registrarse formalmente. ACNUR hizo un llamado a los países miembros para que recibieran a los refugiados y éstos obtuvieron gradualmente visas y abandonaron Argentina rumbo a Europa, principalmente, pero también hacia otros países latinoamericanos y hacia Australia. Oficialmente la cifra total de los reubicados en el exterior fue de cerca de 30 000. Los problemas para establecer una cifra exacta derivan de las diferentes actitudes de los gobiernos frente a los refugiados e inmigrantes: en el Reino Unido, por ejemplo, donde los controles son estrictos, el número de chilenos que se encuentra en el país debe ser muy parecido al de las cifras oficiales; en otros países, seguramente esta discrepancia es enorme. Ha sido difícil obtener de ACNUR cifras detalladas o definitivas. Para dar una idea de la magnitud de la discrepancia hemos usado cifras del ICEM sobre el total de los reubicados de América Latina entre octubre de 1973 y mayo de 1979. La mayoría de los exiliados son chilenos y el movimiento de refugiados casi había terminado a fines de 1979. Las cifras son, en consecuencia, una guía razonable para perfilar la situación final: la cifra oficial en Francia es de 3 030, mientras que la Comisión Chilena para los Derechos Humanos estima un número de 15 000 en su reporte anual de 1982; en España la cifra oficial es de 204, pero el Ministerio del Interior calculó en 1984 que la población chilena en este país era de 25 000; las cifras oficiales de Venezuela y Canadá eran de 507 y 405 respectivamente, pero la Comisión Chilena para los Derechos Humanos ha calculado que hay 80 000 chilenos en Venezuela y 12 000 en Canadá.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Todas las cifras de este párrafo fueron tomadas de *Provisional Report on Move-*

En su reporte anual de 1982, esta Comisión calculó que había 163 686 exiliados, en tanto que un artículo que apareció en el semanario chileno *Hoy*, en enero de 1984, proponía una cifra de 179 268. También el Centro para la Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) llevó a cabo un estudio en 1984, en Chile y en el exterior, y calculó una cifra de entre 200 y 250 000 exiliados.<sup>4</sup>

Es aún más difícil precisar quiénes son los refugiados. Cerca de 3 000 salieron al exilio directamente desde las prisiones chilenas y muchos otros habían sido detenidos y liberados dentro del país. Muchos huyeron cuando se decretaron órdenes de aprehensión contra ellos, o cuando tuvieron conocimiento de que la policía secreta los seguía. Otros más dejaron el país por miedo a ser perseguidos o por las dificultades reales que enfrentaban al ser despedidos de su trabajo por razones políticas o por los drásticos cambios en la política económica del nuevo régimen. Se ha intentado dividir a los exiliados en dos grupos: los que salieron por razones políticas y aquellos cuya motivación fue puramente económica. Pero es muy difícil evaluarlos así con claridad, porque las circunstancias fueron confusas y las motivaciones tampoco son tan claras.

A menudo se dice, y tal vez con razón, que profesionistas de clase media encontraron refugio en mayor proporción que miembros de la clase trabajadora.

La gran mayoría de los exiliados tenía ligas con los partidos que conformaban la Unidad Popular o con el partido revolucionario Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Entre los exiliados se encontraba también un número de demócrata-cristianos prominentes, pero era una pequeña proporción del total. Los partidos más importantes de la UP eran el Comunista y el Socialista, parte del Partido Radical, el Movimiento de Acción Popular Unida (MAPU), que era mucho más pequeño, y la Izquierda Cristiana.

Aunque muchos políticos murieron durante el golpe, los secretarios generales de los partidos sobrevivieron y salieron al exilio. Sin embargo, Luis Corvalán, del Partido Comunista, no logró salir hasta después de un largo encarcelamiento y con gran publicidad alrededor del intercambio Este-Oeste. Se intentó en varias ocasiones establecer organizaciones centrales para toda la oposición: la Central Única de Traba-

---

*ments Effected by the Intergovernmental Committee for European Migration under the Special Programme for Resettlement from Latin American Countries*, junio, 1979 y de *Inserción Laboral para el Retorno: el caso de los exilados chilenos*, Santiago, CIDE, 1984.

<sup>4</sup> Todas las cifras de este párrafo fueron tomadas de CIDE, *op. cit.* y de un artículo de Alfonso Alcalde en *Hoy*, enero, 1984.

jadores de Chile (CUT), con sede en París, funcionó así por un tiempo, al igual que Chile Antifascista, con sede en Berlín. No obstante, ninguno de estos grupos pudo convertirse en una fuerza permanente y unificadora para exiliados tan dispersos y divididos. La mayoría de los refugiados provenían, tal vez, del Partido Socialista, que tenía una membresía masiva en Chile, pero cuya capacidad para organizarse ilegalmente era nula o casi nula. El PC probablemente tenía pocos representantes entre los exiliados dada su experiencia previa en operaciones clandestinas subversivas: había sido ilegal entre 1948 y 1958. De los partidos menores, el MIR y el MAPU tenían una representación mucho mayor en el exilio de la que tuvieron en Chile. En el caso del MAPU, esto se debía a su membresía de clase media alta e intelectual que tenía un mayor acceso al extranjero que cualquier obrero promedio. Los miembros del MIR, por su parte, fueron objeto de una tremenda represión como resultado de su política a favor de la resistencia armada contra los militares. Hasta donde es posible elaborar una cronología de la represión entre los diferentes partidos, el MIR parece haber sido el blanco principal en los primeros años después del golpe. Esta campaña culminó en septiembre de 1975 con la muerte del secretario general del MIR, Miguel Enríquez, en un enfrentamiento armado con el ejército. En 1976, la represión se centró en el PC y el PS: los comités centrales fueron infiltrados y sus miembros asesinados.

También es difícil trazar preferencias geográficas entre los exiliados. Suecia sobresalió por responder con rapidez en casos urgentes y, en consecuencia, debe haber recibido una mayor proporción de miembros del MIR que necesitaban asistencia inmediata. El número de refugiados en la URSS es pequeño y probablemente todos ellos sean comunistas. Sin embargo, entre los que se encontraban en Alemania Oriental, había un número importante de socialistas: sobresalía Clodomiro Almeyda, el ministro de Relaciones Exteriores de la UP. Los intelectuales chilenos consideran que París y Roma son los centros culturales y políticos de Europa y optaron por Francia o Italia siempre que tuvieron la oportunidad. Cuba atrajo, por supuesto, a miembros del MIR.

## EL REGRESO

Aun antes de que finalizara el exilio político en el periodo anterior al plebiscito, la tendencia a regresar era evidente. Numerosas personas fueron invitadas formalmente a volver al país al final de los años setenta, al amparo de dos decretos (el 81 y el 604), que dieron al gobierno completa libertad para prohibir la entrada a los que considerara una

amenaza para la seguridad del Estado chileno. A fines de los años setenta se observó un ligero aumento en el número de quienes regresaban; en esa época la economía empezó a experimentar un *boom* que resultaría de corta duración. Pero el gobierno negó la entrada a muchos, y otros se rehusaron, por principio, a someterse al procedimiento establecido por el régimen.

Esta situación se mantuvo inalterada hasta octubre de 1982, cuando Pinochet reunió a una comisión —de corta vida— para examinar el problema de los exiliados. En diciembre del mismo año se publicó una lista de 125 personas que podían regresar; a esta lista siguió, durante 1983 y parte de 1984, la publicación de otras que permitían el retorno a Chile de cerca de 4 000 exiliados. Pero para septiembre de 1984, esta tendencia se revirtió y se publicó una lista, de 4 942 personas que no podían regresar. En 1985, esta última lista fue sometida a revisión en tres ocasiones y se borró el nombre de 1 347 exiliados. Entre enero y junio de 1986, se efectuaron tres correcciones más a la lista que afectaron a 50 personas en cada ocasión y el total de los excluidos se redujo a 3 717. Entre las muchas críticas dirigidas a las listas estaba el que incluyera niños, gente que ya había regresado al país y muertos. Algunas personas, a las que la lista otorgaba en teoría el derecho a regresar, fueron excluidas. En febrero de 1985, el gobierno dio una garantía formal de que aquellos cuyos nombres no aparecieran en las listas podían regresar, pero obviamente, muchos exiliados se negaron a confiar en este tipo de promesas.

El número total de exiliados que volvieron a Chile entre 1976 y mayo de 1985 es, de acuerdo con estimaciones del CIDE, de entre 2 640 y 3 017 personas. Aunque ha habido un flujo continuo de exiliados que retornan a Chile, la mayoría de los que han vuelto lo hicieron después de 1983, cuando el relajamiento de ciertas restricciones y el crecimiento de la oposición dieron a la gente confianza suficiente para regresar al país.

#### LA IMPORTANCIA DEL EXILIO Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Todos los partidos y las agrupaciones políticas han tenido que repensar sus creencias políticas básicas en las últimas dos décadas. Cerca de 200 000 chilenos (cuando menos) se dispersaron en todo el mundo; tenían experiencia política y seguían de cerca los grandes debates de la política mundial. Su presencia afectó a las sociedades que los recibieron, especialmente las de Francia e Italia, países en los que la configuración política no es tan distinta de la de Chile. En estas naciones, el

debate sobre las “lecciones de Chile” llevó a un replanteamiento de las estrategias políticas de la izquierda. La discusión sobre Chile afectó profundamente a los exiliados: del debate alrededor del eurocomunismo surgió una izquierda más pragmática y moderada que dio gran importancia a las metas de mayor igualdad y mejor control estatal de la economía. La izquierda europea desarrolló ideas nuevas sobre la planeación, las ventajas de una economía mixta y la necesidad de la cooperación entre el capital, el trabajo y el gobierno, que afectaron profundamente a los exiliados chilenos, sobre todo a los socialistas.

### *El Partido Socialista*

Los partidos políticos han desempeñado un papel central y dominante en la organización de la vida política en Chile. En el pasado, la competencia electoral fue feroz y, al parecer, será igualmente feroz en el futuro. La mayoría de las organizaciones sociales, como los sindicatos, han estado estrechamente unidas a uno o más partidos y mantienen todavía estas ligas, aunque con una mayor autonomía. Una de las metas principales de la dictadura, si no es que la más importante, fue acabar con el control de los partidos sobre la vida política chilena. Uno de los principales métodos que utilizó para lograr este objetivo fue exiliar a los líderes partidistas. Aunque la dictadura no logró sus propósitos, la represión y el exilio tuvieron consecuencias importantes para los partidos.

El partido más afectado por la represión y el exilio fue el PS, el partido más grande de la izquierda unida que llegó al poder con Allende y que siempre estuvo más dividido que su mayor rival, el PCCH. El PS está ahora escindido en dos bloques: el partido de Ricardo Núñez, que formaba la Alianza Democrática junto con el PDC, y el partido de Almeyda, que era parte del Movimiento Democrático Popular, (MDP), junto con el Partido Comunista. Hay diversas facciones y divisiones dentro de estos dos bloques principales.

Esta fragmentación no es de sorprender dado el brutal ataque político del régimen pinochetista sobre el Partido Socialista. En palabras de uno de los principales líderes de la facción moderada (Núñez) del PS, Ricardo Lagos:

¿Cómo puede un partido seguir existiendo cuando todo su liderazgo vive en el exilio, está preso o simplemente ha “desaparecido”? Todo el comité regional de la Serena, de Atacama, de Calama, de Antofagasta, de Iquique, murió. Sólo dos partidos en Chile lograron mantener un liderazgo unificado durante la dictadura: el PDC y el comunista. El resto fueron

incapaces de sobreponerse a la crisis orgánica creada por la dictadura, y nosotros no fuimos la excepción. Esto explica la diáspora del socialismo de hoy.<sup>5</sup>

Después de 1973, el socialismo chileno entró en un periodo de autoanálisis profundo. Este proceso produjo dos grandes interpretaciones alternativas de las políticas a seguir en el futuro: una de tendencia "eurosocialista", la otra, a favor de una alianza más estrecha con los comunistas. El debate tuvo lugar principalmente en el exilio, después de que el partido sufrió una violenta represión en Chile. Estas interpretaciones rivales fueron importadas de regreso a Chile cuando la situación política permitió otra vez, a principios de los años ochenta, una cierta actividad partidista.

Según Carmelo Furci, en la primera declaración importante, en una reunión clandestina en Chile, se señaló la necesidad de establecer: "una organización basada en el centralismo democrático leninista, con una ideología y programa homogéneos; un partido que constituya una vanguardia revolucionaria de las masas, disciplinada y homogénea".<sup>6</sup> Pero esta línea ideológica, aparentemente clara, entró en conflicto con la confusa realidad del partido: varios grupos exiliados reclamaron ser los auténticos líderes del partido y las ligas con el pequeño movimiento socialista ilegal en Chile resultaron ser tenues y complicadas.<sup>7</sup>

El cisma mayor tuvo lugar en 1979, después de una sesión del comité central del partido en Argelia en 1978. Fue un evento sumamente complicado que giró alrededor de diferencias ideológicas, ambiciones personales, problemas de comunicación y, presumiblemente, influencias externas sobre los principales grupos dentro del partido, que incluían presiones económicas —aunque los detalles de este tipo de actividades quedaron envueltos en el misterio.

Los socialistas de Núñez se vieron influidos, al parecer, más por

<sup>5</sup> De la entrevista en *¿Qué pasa?*, Santiago, marzo 27, 1986, p. 26.

<sup>6</sup> Carmelo Furci, *The Crisis of the Chilean Socialist Party in 1979*, versión preliminar núm. 11, Institute of Latin American Studies, Universidad de Londres, 1984, es una fuente invaluable sobre el cisma de 1979. Véase también la publicación chilena *Chile-América*, Roma, dossier 54-55, 1979. Para una interesante reflexión del pasado, presente y futuro del socialismo chileno, véase el libro del socialista exiliado, Jorge Arrate, *La fuerza democrática de la idea socialista*, Santiago, Ediciones Ornitórrinco, 1985.

<sup>7</sup> Aniceto Rodríguez, un antiguo secretario general del partido, exiliado en Venezuela, se quejó amargamente de que en 6 años de exilio (1973-1979) hubo tan sólo dos asambleas aparentemente representativas: en Cuba y en Argelia. Pero, en su opinión, ambas fueron manipuladas por minorías que trataban de prolongar su poder. Véase *Chile-América*, *op. cit.*, p. 112.

analogías y comparaciones intelectuales, que por una línea única de liderazgo que viniera del exilio. Apoyan una versión del socialismo menos utópica y sectaria. Ricardo Lagos, por ejemplo, subraya la necesidad de un diálogo constructivo con los sectores empresariales: “ésta es la influencia del socialismo europeo sobre el socialismo chileno ahora”<sup>8</sup> Señala otra influencia importante, la de Gramsci, en el sentido de que él ve al socialismo no como una toma del poder estatal, sino como la difusión amplia de los valores socialistas.<sup>9</sup> La entrada al Partido Socialista de grupos intelectuales importantes, que antes eran parte del MAPU, reforzó esta corriente de análisis.

Este grupo moderado ha ganado adeptos entre la intelectualidad, pero la facción de Almeyda sigue siendo mayoritaria entre las filas del partido. Su visión del socialismo es aún intransigente. Almeyda sustenta y defiende sus creencias con base en las ideas del Manifiesto Comunista, el marxismo-leninismo y la “dictadura del proletariado”. La ideología de este grupo refleja la creencia de que sólo pueden asegurarse ganancias permanentes para el proletariado a través del control efectivo del poder estatal, posición comprensible a la luz de la represión que han sufrido. La crítica principal que hacen a los socialistas moderados es que corren el riesgo de convertirse en un mero apéndice de los demócrata cristianos, y que sus ideas son, en realidad, las de la social democracia apenas disfrazadas. Los socialistas de Almeyda aseguran que ellos representan la tradición histórica del socialismo chileno. Este grupo corre el peligro, por supuesto, de convertirse en un apéndice de los comunistas, pero su política radical tiene, al parecer, más atractivo para las bases populares del partido, aunque esto sólo podría demostrarse en una elección libre.

El socialismo chileno ha estado abierto siempre a influencias externas y se ha dividido a menudo sobre cuestiones ideológicas y de alianzas políticas, sobre todo en relación al PC. El exilio multiplicó la variedad de influencias ideológicas en el partido y dio lugar a la aparición de dos versiones del socialismo muy diferentes. Sin el proceso unificador que se deriva de participar en contiendas electorales y de incorporar plenamente a las bases a la vida partidaria, y con las disputas ideológicas que afectan a los partidos en el exilio, es casi seguro que las dos variedades de socialismo se mantengan separadas.

<sup>8</sup> Entrevista en *¿Qué pasa?*, 27 de marzo, 1986, p. 27.

<sup>9</sup> Raúl Ampuero, uno de los principales teóricos del socialismo chileno, piensa también así. *Chile-América, op. cit.*, p. 94.

*Los otros partidos*

El PC sufrió una gran pérdida de líderes de niveles medios después del golpe. Sin embargo, algunas figuras importantes se encontraban fuera del país en el momento del golpe (como Volodia Teitelboim), y otras consiguieron salir de Chile (como Luis Corvalán). Los líderes en el exilio mantuvieron, con la ayuda de Moscú, un control firme sobre el partido. El PC tuvo un buen desempeño en la clandestinidad y aprovechó su experiencia: funcionó ilegalmente durante 10 años, después de que fue prohibido en 1948. El exilio no le significó pérdida de fondos, de apoyo internacional, de prestigio, ni presiones contradictorias que lo fragmentaran. Sin embargo, hubo tensiones entre la base del partido en Chile —crecientemente formada por jóvenes pobres o desempleados de los barrios populares, que tienden a la violencia como táctica política esencial— y el liderazgo en el exilio, acostumbrado a los congresos, los sindicatos y al estilo político de la Unidad Popular.

El PC se inclinó a favorecer insurrecciones en 1980, cuando decidió que la violencia era una táctica legítima en la lucha para derrocar a Pinochet. Al parecer, este cambio reflejó un giro en la actitud del movimiento comunista internacional, que prefería la lucha armada, más que la vía pacífica, como medio para llegar al socialismo. El movimiento comunista no quería ser el último en llegar a las barricadas revolucionarias, como sucedió en Nicaragua con el levantamiento que derrocó a Somoza. Pero hay también razones internas que explican el cambio. La base social del partido cambió con la pérdida de poder de los sindicatos y con el crecimiento de desempleados radicalizados en los barrios pobres. El partido, ansioso de aprovechar esta fuente potencial de oposición a Pinochet, se preparó para usar tácticas políticas apropiadas para aquellos que podían ejercer influencia no mediante huelgas, sino organizando las protestas en las barriadas.

Sin embargo, este giro táctico no fue definitivo: puede transformarse si las circunstancias cambian en el futuro. Muchos de los cuadros experimentados del partido son líderes sindicales con una visión más centrada en el trabajo paciente dentro de las fábricas, que en la violencia impaciente de las barriadas. Después de todo, históricamente, el partido no ha tenido mucho éxito cuando ha intentado recurrir a la insurrección y ha tenido un éxito relativo en la construcción de amplias alianzas a imagen del Frente Popular y la UP. Chile no es Nicaragua, ni el Salvador, y el Frente Patriótico no es el movimiento sandinista.

El exilio no tuvo el mismo efecto fragmentador en el PC que en el PS. Las razones son bastante claras. El PC ha sido, desde hace mucho, un partido ortodoxo, sumamente leal a Moscú y la mayoría de sus líde-

res se exiliaron en la URSS o en Europa Oriental. El PC depende de Moscú mucho más que antes, sobre todo del apoyo financiero soviético.

El PDC sufrió mucho menos traumas que los partidos de izquierda. Sigue siendo el partido más grande de oposición, lo que le ha dado prestigio y apoyo internacional. Los demócrata cristianos exiliados fueron menos y estuvieron menos tiempo en el exilio. La presencia de líderes tan moderados, como Jaime Castillo en Venezuela y Andrés Zaldívar en Madrid (donde fue presidente de la Internacional Demócrata Cristiana), ayudó a mejorar la imagen del PDC ante gobiernos extranjeros y a agudizar el aislamiento internacional de Chile. Sin embargo, hay evidencia de tensiones entre los líderes exiliados y los que permanecieron en Chile. Aquéllos vivían más confortablemente, aunque sufrieron los problemas propios del exilio. Los que permanecieron en Chile resentían, a veces, el retorno de los exiliados para ocupar posiciones de poder en el partido. El dilema mayor del partido es, no obstante, si debe moverse a la derecha o a la izquierda, y el exilio afectó sólo tangencialmente la discusión de esta disyuntiva.

El efecto del exilio sobre el PR ha sido similar, en términos generales, al del PS; sin embargo, los radicales estaban tan divididos antes de 1973, que el exilio no hizo más que exacerbar la fragmentación y la pérdida de apoyo. El Partido Radical en Chile, que dirigía Enrique Silva Cimma, formaba parte de la Alianza Democrática y abogaba por la adopción de políticas similares a las de la social democracia europea. Pero el partido en el exilio estuvo dominado por uno de sus vicepresidentes, Anselmo Sule, cuya posición era más cercana a la del MDP y a la de los comunistas. Su poder en el partido se basa en el control de los fondos internacionales que ayudan a mantener viva la organización. Por ejemplo, fondos provenientes de la Internacional Socialista, de la cual el Partido Radical es miembro. El PR se dividió en tres distintos partidos durante el gobierno de la Unidad Popular y su base electoral disminuyó considerablemente. Sumado a la debilidad del partido y a su incierta base electoral, el problema del exilio mantiene la incertidumbre e impide la unidad de la vieja base de apoyo del radicalismo.

Los partidos de centro pudieron volver a operar en Chile hasta después de 1983 y, aún entonces, sufrieron muchas restricciones a su libertad de acción. No debe sorprender, en consecuencia, que todos los partidos de oposición hayan recurrido al apoyo externo para sobrevivir. Los partidos de izquierda no tenían alternativa: estaban fuera. Sus percepciones quedaron marcadas por una década de exilio, aunque las influencias no fueron siempre las mismas. Los socialistas moderados que regresaban del exilio en Francia, Italia o España, pueden haber leído su Gramsci, pero los socialistas que vivieron en Alemania del

Este tendían a dar prioridad a una alianza con los comunistas. Para los comunistas jóvenes, o miembros del MIR, que se asilaron en Cuba, el exilio significó entrenamiento en la lucha de guerrillas y no es descabellado suponer que los que intentaron asesinar a Pinochet en septiembre de 1986 fueron producto de ese entrenamiento. Es sin duda debatible si esto puede ser considerado como apoyo externo para el establecimiento de la democracia.

El regreso de los exiliados a partir de 1983 no significó la disminución del interés internacional en Chile, sino todo lo contrario. Las enormes sumas de ayuda que habían fluído a Chile por motivos humanitarios se desviaron, a veces sutilmente, hacia objetivos políticos. (Entre esa ayuda se cuenta la que otorgaron las organizaciones católicas en Europa y Estados Unidos: más de 67 millones de dólares entre 1974 y 1979; 20 millones más se dirigieron a grupos eclesiósticos en Chile desde el congreso norteamericano y el gobierno alemán.)<sup>10</sup> Los exiliados desempeñaron un papel fundamental en la obtención y uso de esa ayuda. ¿De dónde venía y por qué? ¿Qué efectos tuvo? ¿Fue una bendición sin costos? ¿Qué papel desempeñó Estados Unidos? Trataremos de responder a éstas y otras preguntas.

#### EL AISLAMIENTO DEL GOBIERNO

Antes de analizar el apoyo al gobierno, es interesante estudiar el aislamiento diplomático del gobierno de Pinochet, porque ambos están relacionados. La oposición se benefició del apoyo internacional precisamente porque el gobierno militar fue reprobado ampliamente. El expediente de Chile en relación con los derechos humanos se ha revisado y condenado anualmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde 1974. En ese año, 90 países condenaron los abusos contra los derechos humanos perpetrados por el régimen militar, 26 se abstuvieron y 8 apoyaron a Chile. El "mejor" año para Chile fue 1981, cuando 81 países criticaron al régimen, 20 lo apoyaron y 40 se abstuvieron. Para 1985, las cifras fueron: 88 a favor de la condena a Chile, 11 en contra y 47 abstenciones.<sup>11</sup>

Los únicos países con alguna importancia internacional que apoyaron consistentemente a Chile fueron China, Israel y Sudáfrica. El intento de Pinochet por visitar a Marcos abortó: prueba de que no podía

<sup>10</sup> Brian Smith, *The Church and Politics in Chile*, Princeton, 1982, p. 325.

<sup>11</sup> Heraldó Muñoz, *Las relaciones exteriores del gobierno militar chileno*, Santiago, 1986, p. 19.

contar ni con los dictadores para apoyar a su régimen. A China le interesaba claramente llenar el vacío que había dejado Moscú después de 1973; deseaba mantener a Taiwan fuera de Chile y asegurarse el apoyo de un aliado en el ámbito internacional contra la URSS. El comercio entre los dos países se elevó de un millón de dólares en 1970 a 137 millones de libras esterlinas en 1984, y resultó en un fuerte superávit para Chile. Las relaciones de Chile con Sudáfrica e Israel están montadas también en el deseo de países impopulares de encontrar aliados. Israel, además, ha provisto de armas a Chile.

### *Relaciones con Estados Unidos*

Es indudable que la preocupación central de la política exterior de Pinochet ha sido establecer buenas relaciones con Estados Unidos. Esto ha sido difícil debido a varias razones: el complejo de culpa norteamericano por su participación en los eventos que llevaron al golpe y por la liga de ese episodio con Watergate y con la presidencia de Nixon; el repugnante asesinato de Orlando Letelier en el centro de Washington en 1976; la incesante campaña de la oposición chilena en los Estados Unidos; el *lobby* en favor de los derechos humanos en Estados Unidos, que le da una importancia simbólica a Chile; la condena a Chile, en los últimos años, como contrapeso útil a la condena del régimen nicaragüense.<sup>12</sup>

La política norteamericana hacia Chile no ha sido consistente a través de los años, y varía de una agencia del gobierno a otra. Al Departamento del Tesoro le gustan el modelo económico chileno y el pronto pago que ha hecho de su deuda externa. El Pentágono admira abiertamente a las fuerzas armadas chilenas. Después del golpe y hasta la elección del presidente Carter, las relaciones entre Chile y Washington fueron buenas. Chile recibió entre 1974 y 1976, 628.1 millones de dólares de Estados Unidos bajo los rubros de ayuda económica directa, ayuda militar y Ley Pública 480, además de créditos del EXIMBANK, del Banco Mundial y del BID. En cambio, la ayuda otorgada a Chile durante los años del gobierno de Allende fue de sólo 67.3 millones de dólares. Sin embargo, al llegar Carter al poder hubo un cambio abrupto de política. Con el objeto de aislar a Chile en el ámbito internacional, Washington votó en contra de otorgar préstamos a Chile en los bancos multilaterales, condenó el expediente chileno en materia de de-

<sup>12</sup> La relación entre los dos países está bien estudiada en Heraldo Muñoz y Carlos Portales, *Una amistad esquivada: las relaciones de Estados Unidos y Chile*, Santiago, 1987.

rechos humanos en los debates de Naciones Unidas, prohibió nuevos préstamos del EXIMBANK a Chile, dejó de invitar a Chile a participar en maniobras navales, etcétera. Sin embargo, de acuerdo con Susan Kaufman Purcell, estas acciones “tuvieron un efecto mayor en los Estados Unidos que en Chile. Permitieron que el gobierno y el pueblo norteamericanos recuperaran su buena conciencia en relación con su política exterior después de la guerra de Vietnam. . . En Chile, el impacto fue mínimo. Sólo logró fortalecer los sentimientos pro americanos entre los partidos de centro y de centro izquierda”.<sup>13</sup> Esto se debió, en gran parte, a que Chile estaba a punto de entrar en un periodo de expansión económica de corta duración —1977 a 1981— que facilitaba la obtención de créditos externos.

A partir de entonces, las relaciones se volvieron más cordiales hasta que en 1985, la creciente represión en Chile y el restablecimiento del estado de sitio llevaron a Estados Unidos a abstenerse de votar en favor de un crédito que Chile había pedido al BID. Pinochet levantó el estado de sitio en julio, cuando Estados Unidos amenazó con tomar una posición similar en relación con un crédito del Banco Mundial. Lo anterior fue visto como prueba de que este tipo de presiones podían ejercerse exitosamente sobre Chile. Sin embargo, estas tácticas empezaron a ser realmente efectivas hasta que la oposición unida resurgió en Chile como una alternativa a Pinochet, después de la firma del *Acuerdo Nacional* en agosto de 1985. Otro indicio de que la política estadounidense empezaba a alentar el fortalecimiento de la oposición fue el remplazo del embajador James Theberge, un ultraconservador, por el diplomático de carrera Harry Barnes. En la primavera de 1986 Estados Unidos dio un paso sin precedentes al patrocinar en la Comisión sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas una resolución que condenaba a Chile. En noviembre de 1986 y en 1987, Washington se abstuvo nuevamente de votar a favor de créditos que el Banco Mundial debía otorgar a Chile, y aplicó también sanciones económicas limitadas.

Pero Estados Unidos no quiere acorralar al gobierno de Pinochet. Están de acuerdo con su modelo económico y no desean minar la capacidad de Chile para pagar su deuda externa. Mas aún, hay ahora grandes inversiones norteamericanas, especialmente en el sector minero, que Washington no quiere afectar. Las relaciones con los militares como institución han sido cordiales y Estados Unidos no desea perder la estación para detectar misiles que acaba de instalar en la isla de Pascua. Los norteamericanos quieren que Pinochet deje el poder porque

<sup>13</sup> Susan Kaufman Purcell, Arturo Valenzuela y Mark Falcoff, *Chile: Prospects for Democracy*, Nueva York, 1988, p. 59.

sienten que ésta es la mejor manera de asegurar la estabilidad económica y política a largo plazo y les preocupa que una prolongación de este gobierno personalista fortalezca a la izquierda marxista. Washington tiene ahora, además, confianza en que existen fuerzas políticas en Chile que ofrecen una alternativa de gobierno aceptable: una confianza que se ha sustentado parcialmente en la asidua labor de cabildeo que ha llevado a cabo la oposición en Washington. Este apoyo a la oposición política chilena asegura, de paso, a los grupos empresariales que la oposición no llevará a cabo reformas económicas drásticas.

Las formas específicas del apoyo que ha recibido la oposición serán analizadas después. Pero vale la pena recordar un incidente ocurrido dos noches antes del plebiscito del 5 de octubre. El Departamento de Estado norteamericano declaró que había recibido información de que se planeaba alterar el resultado del plebiscito si era contrario al gobierno. Señaló que veía esta posibilidad con alarma y que tomaría medidas si se cometía tal fraude. Es difícil pensar que esta declaración se hubiera hecho pública sin la presión de la oposición chilena. El gobierno se puso furioso. Sin embargo, muchos creían realmente que por lo menos algunos sectores del ejército se habían preparado para intervenir en la noche del plebiscito y anular el resultado. La medida norteamericana fue, sin duda, un apoyo importante para la oposición, pero ¿tuvo también efecto disuasivo sobre el ejército? Si hubiera habido un consenso pleno dentro de las fuerzas armadas para anular el resultado del plebiscito, la medida de Estados Unidos, por sí misma, hubiera sido insuficiente para evitarlo. En ausencia de ese consenso, la declaración norteamericana debe haber fortalecido a aquellos dentro del gobierno opuestos a cualquier acción ilegal. (¡Cómo ha cambiado el mundo desde 1973!)

### *El apoyo internacional a la oposición: 1973-1987*

Una de las primeras manifestaciones de apoyo a la oposición chilena, además de recibir a los exiliados, fue la ayuda otorgada a las diversas organizaciones de exiliados.<sup>14</sup>

Se establecieron organizaciones en diversos países, desde México hasta Suecia. La confederación sindical, CUT, ahora ilegal, estableció oficinas en un buen número de países. Estas organizaciones encauzaron el apoyo a los sindicatos en Chile y fortalecieron la denuncia de la política obrera del régimen en varias reuniones internacionales. Ins-

<sup>14</sup> Esta sección se basa en entrevistas con exiliados que ahora viven en Chile. Todavía no es prudente citar sus nombres.

tituciones académicas como el Instituto para un Chile Nuevo, en Amsterdam, tuvieron un papel importante como centros de reunión de la oposición para analizar lo que sucedía en Chile, emitir críticas al régimen y cabildear en busca de la ayuda de agencias y gobiernos extranjeros para apoyar a los grupos exiliados y a las organizaciones, dentro de Chile, que brindaban protección contra las duras políticas del gobierno. Una de las actividades de la oposición fue publicar *Chile-América* en Roma. Esta revista, que salió durante 10 años a partir de 1974, fue fundada por dos miembros de la UP y dos del PDC en el exilio. Su sola existencia era prueba de que la hostilidad entre estas fuerzas políticas podía ser vencida. Sus análisis inteligentes y sistemáticos sobre Chile fueron un poderoso estímulo para los chilenos en el exilio y para los opositores internacionales del régimen. En su mejor momento llegó a tener cerca de mil suscriptores en todo el mundo, pero la leían y comentaban muchos.

Otra manifestación temprana de apoyo de la comunidad internacional se dirigió a la Iglesia católica y a otras organizaciones religiosas en Chile. Éstas establecieron comedores colectivos, ayudaban a las víctimas de la represión y, más adelante, llevaron a cabo una valiente campaña de apoyo a organismos representativos, como sindicatos y organizaciones de las barriadas.

No es exagerado afirmar que en los años posteriores al golpe, el movimiento sindical chileno se mantuvo con vida gracias a los esfuerzos de la Iglesia y su *Vicaría del Pastoral Obrero*. Brian Smith estimó que entre 1975 —cuando se estableció la *Vicaría de la Solidaridad*— y 1979, cerca de 700 000 chilenos recibieron asistencia legal, ocupacional y para la salud. En sus palabras:

Las transacciones con la iglesia internacional fueron el recurso más importante de la Iglesia chilena para sostener su apoyo verbal y político a favor de los derechos humanos. Las declaraciones del Papa, del Vaticano y del episcopado internacional dieron una fuerte legitimación a las iglesias nacionales para comprometerse en la defensa de los derechos humanos. . . Dentro de América Latina, la Conferencia Episcopal Latinoamericana centró su atención en los peligros del 'estado de seguridad nacional' y enfatizó que la Iglesia tenía la responsabilidad de oponerse a él. Lo más importante ha sido el aumento significativo de la asistencia financiera proveniente de fuentes seculares y de las iglesias del mundo, desde el golpe, para apoyar sus programas en defensa de los derechos humanos. Sin esta ayuda masiva del exterior, ninguno de estos nuevos compromisos hubiera sido posible.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Smith, *op. cit.*, p. 323.

No sólo la Iglesia católica fue importante como fuente de financiamiento; el Consejo Mundial de Iglesias dio un gran apoyo, en parte, como resultado de los esfuerzos de las organizaciones eclesiológicas del Tercer Mundo para influir en el Consejo Mundial para que otorgara apoyo a Chile.

Una tercera fuente de apoyo internacional se dirigió a diversos institutos de investigación y difusión que tendrían una importancia crucial, no sólo para apoyar la crítica académica al régimen, sino en la organización política de la oposición misma, especialmente durante la campaña del plebiscito. La Iglesia fue una de las primeras en responder a los ataques del gobierno en el campo de la educación superior: fundó la *Academia de Humanismo Cristiano* en 1975 para ayudar a los mil académicos despedidos de las universidades y para expresar su descontento con la continua intervención de los militares en las universidades. De la Academia nacieron investigaciones valiosas y ayuda a las organizaciones sociales. Pero la institución brindó también apoyo vital a otras agencias independientes de investigación y a grupos específicos como el *Grupo de los 24*, que sostuvo una crítica continua a las propuestas constitucionales del gobierno y ofreció un foro donde podían reunirse los miembros de la oposición y elaborar propuestas alternativas.<sup>16</sup>

Institutos de investigación como la Academia y muchos otros tuvieron una importancia mayúscula para los partidos de oposición. En ocasiones, funcionaron de hecho como el cuartel general de algún partido bajo la fachada académica. La actividad partidista había sido declarada ilegal, ¿en dónde podía reunirse el liderazgo, formular planes alternativos, conseguir empleo a diversas personalidades, debatir críticamente la política gubernamental y mostrar al mundo que aún había oposición en Chile, aunque tuviera que encubrirse en un cuidadoso lenguaje académico? De hecho, precisamente porque esas instituciones eran objeto de un minucioso escrutinio por parte del gobierno, su trabajo tenía que ser de un alto nivel académico. Algunas de las mejores investigaciones en el área de ciencias sociales en América Latina estuvieron asociadas con el sector académico "informal" de Chile. Nadie ponía en duda la cercanía de estas instituciones con la oposición y, en algunos casos, con partidos políticos específicos: pero no había ninguna duda tampoco, de que eran empresas académicas serias —mucho más que muchas de las facultades de las universidades chilenas.

Estos institutos no hubieran sobrevivido sin financiamiento externo y fueron, de hecho, el conducto principal para que esos recursos lle-

<sup>16</sup> Esto está basado en un trabajo no publicado de un miembro de la *Academia*, María Teresa Lladser. Agradezco a la autora su ayuda.

garan a la oposición. Los intelectuales han desempeñado siempre un papel importante dentro de la vida de los partidos chilenos (lo que explica, en parte, el peso excesivo que tiene la ideología en los partidos políticos). En el nuevo contexto, posterior a 1973, los intelectuales cobraron aún más importancia frente a los políticos que dirigían la vieja maquinaria partidista. Aunque las cifras no son exactas, se calcula que hay 70 institutos de investigación; 10 de ellos, muy grandes. En términos muy generales, 95% de su presupuesto es financiado desde el exterior, y en términos aún más generales, puede pensarse en una cifra de medio millón a un millón de dólares anuales. Los institutos fueron el único canal a través del cual la oposición pudo establecer un debate —aunque muy limitado— con el gobierno: el régimen respondió a críticas “técnicas” con una actitud que no hubiera adoptado frente a desafíos políticos abiertos.<sup>17</sup>

Los institutos de investigación tuvieron un lugar central en la campaña de la oposición previa al plebiscito. Tres grandes institutos, CED, ILET y SUR, formaron un grupo para participar en la campaña: el CIS. Este grupo organizó una serie de reuniones para asesorar —por no decir instruir— a los políticos sobre la mejor estrategia a seguir en la campaña, jugó un importante papel en el acuerdo de los partidos para formar la coalición del NO y diseñó la brillante campaña televisiva de la oposición. En la campaña propiamente dicha, los comités técnicos, formados por investigadores de éste y otros institutos, ocuparon una posición de gran importancia. Probablemente su participación no será tan decisiva en las elecciones de 1989, pero fue fundamental durante el plebiscito.

La ayuda internacional se canalizó también en apoyo de la prensa y la radio. El gobierno toleró por años tan sólo dos medios de comunicación de oposición, la estación de radio *Cooperativa*, y aquella que dependía de la Iglesia: *Chilena*.

Aunque la *Cooperativa* ha tenido un éxito tal que podría probablemente autofinanciarse a partir de sus anuncios, la situación era diferente en los días posteriores al golpe. La liberalización incipiente de mediados de los años ochenta, permitió que floreciera cierta prensa de oposición, en especial los periódicos *La Época* y *Fortín Diario*. Esto hubiera sido imposible por ejemplo, en el caso de *Fortín*, sin el apoyo externo proveniente de los sindicatos y de las organizaciones no gubernamentales italianas.

Otro caso de una organización financiada desde el exterior es el de

<sup>17</sup> El mejor ejemplo fue la continua crítica de los economistas del CIEPLAN al modelo económico del gobierno.

los sindicatos. Los sueldos sindicales son pagados con fondos internacionales; lo mismo sucede con los programas de adiestramiento y con los viajes de líderes sindicales al exterior para presentar sus posiciones en asambleas internacionales. El movimiento sindical en Chile es ahora débil y está dividido, pero las dos facciones ideológicas del sindicalismo reciben financiamiento externo.

Por último, los partidos políticos dependen también, por supuesto, del financiamiento exterior, aunque por ser indirecto y estar rodeado de una atmósfera de secreto, cualquier estimación de su monto sea engañosa. No obstante, es un secreto a voces que los socialistas de Núñez reciben un apoyo considerable de partidos europeos de la misma tendencia, que el pequeño Partido Radical tiene gran influencia en la Internacional Socialista, que el PDC depende mucho del apoyo de fuentes alemanas. Esto es inevitable cuando la recolección de las cuotas partidistas es imposible, cuando los partidos no tienen ninguna de las prerrogativas que acompañan al poder, ni siquiera en los municipios, y cuando los sectores empresariales no están dispuestos a enemistarse con el general financiando a la oposición (aunque hay evidencia de que algunos empresarios financiaron, por si acaso, a ambos contendientes en el plebiscito).

¿Quién dio dinero y por qué?, ¿cuánto dinero entró a Chile? Para dar una respuesta acertada sería necesario examinar los estados de cuenta de varios cientos de organizaciones no gubernamentales en el exterior que dan apoyo a aproximadamente 300 de sus equivalentes chilenas. La estimación mejor fundamentada es, tal vez, la del *Taller de cooperación al desarrollo*, que calcula que en los últimos años han entrado a Chile cerca de 55 millones de dólares al año.<sup>18</sup> Por supuesto, no todo este dinero ha ido específicamente a la oposición y, menos aún para lograr objetivos claramente políticos. Sin embargo, trazar una línea entre los programas de ayuda en términos políticos y no políticos, no siempre tiene mucho sentido en la práctica. El gobierno británico gastó 11 millones de libras durante 10 años para becar a cerca de 900 estudiantes y académicos chilenos exiliados.<sup>19</sup> ¿Podría afirmarse que fue sólo asistencia técnica?

El apoyo a Chile venía de una amplia variedad de países, a través de las organizaciones no gubernamentales; pero muchas veces provenía directamente de los gobiernos, como es el caso de las cuatro más grandes agencias holandesas que desarrollaron una gran actividad en

<sup>18</sup> Véase su publicación *La cooperación internacional frente a los cambios políticos en Chile*, Santiago, julio 1988, p. 11.

<sup>19</sup> Véase el reporte del World University Service. *A Study in Exile*, Londres, 1986.

Chile. Alemania contribuyó considerablemente a través de sus fundaciones para fortalecer a los partidos. El papel de Cuba fue importante desde el momento del golpe: recibió a miembros de varios partidos y los instruyó para operar en la clandestinidad. Italia fue un donador muy importante en los últimos años, y Holanda fue de los más generosos en términos per cápita.

Dos organizaciones que fueron profundamente afectadas por el golpe, la Internacional Socialista (IS) y la Internacional Demócrata Cristiana, establecieron programas especiales para otorgar ayuda a simpatizantes. En una de las reuniones especiales de la Internacional Socialista en 1977, representantes del PCCH fueron los primeros comunistas en asistir a una reunión de la organización desde 1922. El PR ha sido miembro de la IS desde hace mucho tiempo y adoptó una orientación más izquierdista, que le permitió adquirir gran influencia en el manejo de las actividades de la IS en Latinoamérica. Parte de la preocupación de la IS por Chile se explica, igualmente, por la creciente importancia de los partidos socialistas en España y Portugal.<sup>20</sup> Además de ayudar como naciones individuales, los países europeos trabajaron en el marco de la Comunidad Económica Europea para condenar las medidas represivas del gobierno y enviar ayuda a la oposición. ¿Por qué tantos países y organismos internacionales han dado ayuda a Chile? Y no sólo europeos: México fue una importante base política para la oposición y el PRI apoyó, en especial, al Partido Radical.

Es más fácil entender el caudal de ayuda durante la campaña previa al plebiscito, cuando se presentaba una opción política de gran importancia. La ayuda oficial norteamericana se centró en este evento. La Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) concedió un financiamiento de 1.2 millones de dólares al Centro para las Elecciones Libres de Costa Rica (CAPEL), en diciembre de 1987. A su vez, CAPEL financió a Civitas, un grupo chileno ligado a la Iglesia, que hacía campaña para elevar el registro de votantes. Paralelamente, el congreso norteamericano otorgó un millón de dólares a la Fundación Nacional por la Democracia para apoyar las actividades de la oposición. Pero todo esto llegó tarde y deja abierta la pregunta: ¿qué inspiró durante 15 años a la comunidad internacional para ayudar a Chile? ¿Había motivos no confesados?

Sin duda muchos motivos eran confusos. Los grupos claramente políticos en el exterior deseaban, por supuesto, ayudar a sus contrapartes en Chile. En estas circunstancias, dar ayuda es un medio para obtener información e influir en el curso de los acontecimientos. Pero, ¿qué

<sup>20</sup> Felicity Williams, *La Internacional Socialista y América Latina*, México, 1984.

puede explicar el apoyo holandés a Chile? El comercio no puede ser una consideración importante y los acontecimientos políticos chilenos difícilmente pueden afectar a Holanda. Podemos suponer que Chile se sumó al debate político interno: dar ayuda a Chile podría haber sido prueba del compromiso de un país con la causa de la democracia en el Tercer Mundo; negar ayuda a Chile era, tal vez, mostrar un franco conservadurismo. Para un país como Holanda, en consecuencia, apoyar a Chile fue una manera de proyectar una imagen tolerante y progresista y ¿habrá revivido los recuerdos de la resistencia holandesa frente al nazismo?

Sin negar ni por un momento los genuinos sentimientos de solidaridad con Chile y el rechazo auténtico a una dictadura brutal, debe tomarse en consideración que la ayuda a la oposición no implicaba ningún costo. La economía chilena no es tan vital para el mundo como, digamos, las economías petroleras o las de países mayores como Brasil o México, y el valor estratégico del país tampoco es considerable. Chile se convirtió en un símbolo y los políticos chilenos en el exilio utilizaron hábilmente la ola de simpatía internacional para organizar la oposición a Pinochet.<sup>21</sup>

#### ¿PARA QUÉ SIRVIÓ LA AYUDA INTERNACIONAL?

La base fundamental de cualquier oposición a un régimen dictatorial debe provenir del interior. Las olas de protesta que se iniciaron en mayo de 1983 no estaban dirigidas, ni siquiera influidas, por el exterior. Los políticos de oposición necesitaban ayuda, pero la fuerza que nutrió principalmente a la oposición provino del intenso anhelo de la mayoría de los chilenos por restablecer un sistema democrático. Y sin embargo, la ayuda externa a Chile en este periodo de transición ha sido mayor que la otorgada a cualquier otro país latinoamericano. Esto fue consecuencia del exilio, de que la estructura política de Chile fuera similar en más de un sentido a la de las democracias occidentales, de la simpatía por los objetivos del gobierno de Allende, de la reacción natural ante la brutalidad del golpe, y fue también resultado de que todos estos factores sumados, convirtieron a Chile en el símbolo de la lucha entre la democracia y la dictadura.

<sup>21</sup> Al ver a muchos políticos de oposición en una recepción en la embajada norteamericana dos noches antes del plebiscito, le pregunté a uno de ellos qué diablos hacían ahí. La respuesta fue: “¿dónde crees que se ha reunido la oposición durante todos estos años?”.

Como el ejemplo más claro de la ayuda internacional fue la campaña alrededor del plebiscito, la analizaremos con detenimiento.

El presidente Pinochet anunció su candidatura oficialmente cuando fue nominado por la junta militar el 30 de agosto de 1988. Sin embargo, inició su campaña meses antes y la de la oposición comenzó en febrero de ese año, cuando 16 partidos —con excepción del Comunista— formaron el *Comando por el NO*.

El apoyo internacional a la oposición chilena durante la década anterior había ayudado a mantener la actividad —aunque reducida— de la oposición. Pero conforme apareció la posibilidad de acciones políticas abiertas, la ayuda externa empezó a llegar a Chile. El apoyo al plebiscito no fue sólo financiero. Un ejemplo es la declaración norteamericana previa al plebiscito, que ya mencionamos. Otros grupos emitieron declaraciones similares, aunque tal vez menos dramáticas. Este fue el caso de los presidentes de varios países democráticos de América Latina y de la Comunidad Económica Europea. Había además en Chile unos mil observadores extranjeros, la mitad miembros de distintos parlamentos, el resto representantes de otras asociaciones. El gobierno no vio con buenos ojos la presencia de estos observadores, pero resultaron una bendición para la oposición: dificultarían el fraude y estimularían a los grupos locales.

La preocupación mayor de la oposición era la posibilidad de que el gobierno recurriera al fraude. Para minimizar este peligro, la oposición instaló por lo menos tres sistemas paralelos de computadoras ligados a una intrincada red de máquinas *fax*. Todo este mecanismo se sustentaba, desde luego, en la premisa de que después de una intensa campaña de meses, el miedo a votar había desaparecido. Otra preocupación de la oposición era que los votantes temieran que el voto no fuese en realidad secreto y no acudieran a las urnas. Se sabía también que el gobierno podía ejercer presión, sobre todo en los municipios, para asegurar un voto favorable a Pinochet, y se temía que los votantes no pudieran resistirla.

El apoyo norteamericano incidió en estas dos preocupaciones. Ayudó al registro de los votantes y proveyó contabilidad computarizada el día de la votación. Aún antes del otorgamiento del préstamo especial en 1987, la Fundación Nacional por la Democracia había proporcionado fondos a la oposición chilena. Estos se dirigieron a los institutos de investigación encargados de estudiar la votación, a empresas editoriales y a la prensa (por ejemplo, dieron 50 000 dólares a *La Época* en 1988); también a organizaciones comunitarias y a sindicatos (se concedieron 856 000 dólares a la confederación sindical anticomunista, la CDT, entre 1984 y 1988); y financiaron una gran variedad de semina-

rios, reuniones, discusiones y programas de adiestramiento. Según un documento interno de la Fundación Nacional, de septiembre de 1988, ésta había gastado en Chile (sumando una pequeña contribución de la AID) un total de 3 824 000 dólares a partir de 1985.<sup>22</sup>

La Fundación Nacional por la Democracia es una agencia gubernamental creada durante el gobierno de Reagan. La dirige Carl Gershman, un ex asesor de la señora Kirkpatrick y está asociada con el instituto de investigación de tendencia conservadora, *Freedom House*. En una entrevista aparecida en *El Mercurio*, en enero de 1988, Gershman declaró que el objetivo de la Fundación es “promover los valores democráticos en todo el mundo y comprometer activamente al pueblo y al sector privado norteamericanos en la tarea, de manera consistente con las proclamas de Naciones Unidas, el derecho internacional y los ideales norteamericanos”. Su presupuesto total era de 16 millones de dólares en 1988, 45% del cual se dirige a Latinoamérica y 15% de esa proporción, a Chile.

Aparte de Chile, la única donación especial que ha hecho la Fundación fue al sindicato Solidaridad en 1987. Al preguntarle el entrevistador si esta actividad no era equivalente a intervenir en los asuntos internos de Chile, Gershman replicó: “Mire, uno tiene que distinguir entre el apoyo a las fuerzas democráticas y la intervención en los procesos electorales. En aquellos casos en donde se efectúa un proceso libre y democrático con la libre competencia de diversos grupos, la intervención de la Fundación en el resultado sería ilegítima. Pero los esfuerzos que lleven a fortalecer procesos libres y democráticos son una forma de solidaridad, no de intervención”.

Si se suman el millón de dólares que recibió Civitas para financiar la “Cruzada por la Participación Ciudadana” y otros fondos provenientes de agencias como la Fundación Ford, es posible concluir que Chile recibió cerca de 5 millones de dólares provenientes de Estados Unidos en los dos últimos años para ayudar a la organización de la oposición para el plebiscito. Sin duda, algunos recursos fueron a dar a la derecha política chilena para financiar la campaña del gobierno, pero no hay detalles de esta ayuda. Por otra parte, tampoco hay evidencia detallada de la ayuda sueca —de monto considerable— a la oposición.

La prensa internacional cubrió ampliamente el plebiscito. No hay duda de que el gobierno consideró que la prensa y la televisión extranjeras le eran hostiles, y favorables a la oposición. Esto explica el repug-

<sup>22</sup> Estoy muy agradecido con Carol Graham por obtener información de la Fundación Nacional por la Democracia.

nante incidente durante el cual la policía dio una golpiza a cerca de 20 reporteros poco después de que se dieron a conocer los resultados del plebiscito. Aun cuando cada reportero era estrictamente neutral, la oposición estaba convencida de que la presencia de tantos periodistas extranjeros crearía un clima que imposibilitaría un fraude en gran escala.

Un reporte del Diálogo Interamericano de 1984 estableció:

Dudamos que algún gobierno (y menos aún el del país más poderoso del hemisferio) pueda contribuir mucho, en forma directa, a la creación de instituciones democráticas en otros países.

Hay muy buenas razones para compartir el escepticismo de este reporte. Es más fácil dar ayuda humanitaria a las víctimas de una política de abusos contra los derechos humanos y denunciar esas prácticas en los organismos internacionales, que moldear la evolución política de un país de manera predecible y satisfactoria. La ayuda a organizaciones sustentadas en la Iglesia no es tan controvertida; generalmente recibe elogios porque acarrea beneficios prácticos sin el peligro de una interferencia política directa. Pero la ayuda directa a los partidos políticos es de naturaleza diferente y más discutible. Manuel Antonio Garretón dio la voz de alarma en este ámbito:

La influencia internacional debe evitar dos tipos de acciones. Primero, ligar la lucha contra el régimen militar y por el restablecimiento de la democracia con el conflicto Este-Oeste. Esto se refiere, sobre todo, a Estados Unidos. En segundo término, y esto complementa lo anterior, dividir a la oposición en “democrática” y “no democrática”, de tal manera, que tenga efectos en la esfera política y también en las organizaciones sociales, como los sindicatos.<sup>23</sup>

Hay evidencia de que la ayuda externa ha beneficiado más a algunas fuerzas de la oposición que a otras. El PR estaba dividido en tres grupos en el momento del golpe y el voto que recibía era insignificante. Sin embargo, su posición privilegiada dentro de la Internacional Socialista le ha dado una ventaja que se debe más a sus ligas internacionales que a su peso dentro de Chile. Los socialistas de Nuñez recibieron gran apoyo de fuentes europeas y esto tal vez se refleja en la fuerza que tienen en comparación con los socialistas de Almeyda (aunque este grupo

<sup>23</sup> Manuel Antonio Garretón, *Transición hacia la democracia en Chile e influencia externa*, Documento de trabajo, núm. 282, Santiago, FLACSO, 1986, p. 27.

ha recibido ayuda de Alemania Oriental). Y sin duda, los demócrata cristianos deben en buena medida su reputación como el partido mejor organizado de Chile a la ayuda internacional.

Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿deben los partidos de oposición rechazar la ayuda externa con base en el argumento de que puede distorsionar el balance interno de fuerzas? Alguna ayuda puede estar inaceptablemente condicionada, pero hay pocas pruebas de que mucha ayuda haya sido de este tipo. La distorsión más grave podría ser, como apunta Garretón, introducir la guerra fría como criterio para asignar recursos: es difícil explicar de otra forma las grandes cantidades de dinero otorgadas al CDT, por ejemplo. Sin embargo, esto no da más que una ventaja inicial. En el momento en que se normalicen la vida política y las actividades electoral y sindical, las consideraciones internas jugarán un papel más importante y los trabajadores sindicalizados votarán por aquellos líderes que representen mejor sus demandas. Y las distorsiones no van por un solo camino: tanto los comunistas como los anti-comunistas han recibido apoyo. La diferencia es que sabemos mucho más acerca de la ayuda otorgada a los últimos que a los primeros.

En suma, yo concluiría que el apoyo externo a la democracia chilena ha sido, a la vez, importante y positivo; no ha representado la simple imposición de los objetivos de los países donadores sobre las organizaciones chilenas que recibieron esa ayuda. Una oposición acorralada no tiene más alternativa que buscar apoyo de fuerzas democráticas externas para ayudar al proceso interno de democratización. Sin embargo, la simpatía por la causa de la democracia chilena debe atemperarse en relación con la autonomía de los grupos políticos locales. En el difícil periodo posterior al plebiscito, la ayuda multilateral a las alianzas chilenas amplias dificultaría criticar esa ayuda con base en el principio de la no intervención en los asuntos internos de Chile.

Traducción de ISABEL TURRENT